

PASADO Y PRESENTE ARGENTINO

Javier Auyero

Victoria Donda Pérez es una estudiante de derecho de 27 años. En Octubre del año 2004, Victoria se reencontró con su verdadera identidad al ser informada de la existencia de su abuela biológica. Victoria nació en cautiverio, en 1977, a los pocos meses de que su madre, María Hilda Pérez de Donda, fuera secuestrada ilegalmente en plena calle cuando tenía 25 años. Victoria se transformó así en el caso número 78 en ser localizado por Las Abuelas de Plaza de Mayo; Estela Carlotto, la presidenta de esta organización de derechos humanos creada el mismo año que naciera Victoria, celebró la ocasión definiéndola como un “premio al amor”.

En más de un sentido, la historia de Victoria encapsula buena parte de los últimos 30 años de la Argentina, no sólo porque hace referencia a una práctica bastante generalizada durante la última brutal dictadura (1976-1983) sino porque apunta simultáneamente a la persistencia de la labor de uno de los movimientos sociales más duraderos en la Argentina moderna, el movimiento de derechos humanos, y a la constante presencia conflictiva del pasado en la vida actual del país. ¿Cómo contar la historia argentina de los últimos 30 años? Quizás valga la pena refrescarnos la memoria con un somero relato de los hechos socio-políticos más importantes para luego ver cómo estos figuran en el difícil presente del país.

El golpe militar del 24 de Marzo de 1976 pronto convirtió al gobierno militar entonces instaurado en el más sangriento que haya conocido la historia latinoamericana reciente, inaugurando, paralelamente, una nueva forma de desarrollo económico y de represión política en la Argentina. Una alianza entre el poder militar, los grupos de capital nacional más concentrado y las empresas transnacionales constituyen el nuevo bloque dominante a partir de 1976.

Las fuerzas armadas asaltan el poder con “intereses que claramente superaban la esfera de lo económico, apuntando a lograr un disciplinamiento social generalizado mediante un cambio drástico de la antigua estructura de las relaciones económicas, sociales, y políticas”(1). Junto a la apertura externa de la economía y el creciente predominio del capital financiero que desplazan a las anteriores políticas de industrialización por sustitución de importaciones, el gobierno militar pone en práctica una nueva metodología de represión que lleva adelante la entonces dominante Doctrina de la Seguridad Nacional: el secuestro, tortura y asesinato de decenas de miles de personas consideradas opuestas al régimen o la nuevo proyecto civilizatorio, “occidental y cristiano”, que este decía encarnar: “Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bebés y adolescentes, mujeres embarazadas, estudiantes, trabajadores, abogados, periodistas, científicos, artistas y maestros, ciudadanos argentinos y extranjeros, curas y monjas, miembros progresistas de órdenes religiosas –todos vienen a engrosar las filas de los *desaparecidos*” (2). En pocos años, casi 30,000 personas fueron “desaparecidas” –un nuevo eufemismo macabro para referirse a la presunción de muerte.

Los objetivos económicos de la dictadura fueron, en más de un sentido, cumplidos y, sin duda, la represión política tuvo una alta eficacia en difundir una cultura del medio en

buena parte de la sociedad argentina. Sin embargo, la crisis económica de comienzos de los años ochenta produjo un creciente descontento entre sectores cada vez más importantes, descontento que fue canalizado por una emergente movilización sindical que, a su vez, se vio complementada por la creciente publicidad del activismo a favor de la plena vigencia derechos humanos y del juicio y castigo a los responsables de lo que se comienza a llamar “genocidio”. Frente al aumento del descontento social y de la oposición pública, la Junta Militar se embarcó en la infame operación de “recuperación” de la soberanía sobre las Islas Malvinas –la rápida derrota militar (que dejó un saldo de ciento de jóvenes soldados muertos y heridos) condujo a la rápida derrota política del gobierno militar y a un acelerado proceso de apertura democrática que culminó con la elección de Raúl Alfonsín.

El gobierno democrático enfrentó la crisis económica con una cambiante serie de políticas, intentando un retorno a ciertas políticas desarrollistas al comienzo y abdicando frente a las demandas de los organismos internacionales y los sectores dominantes luego. En materia de política militar, el gobierno de Alfonsín se vio jaqueado por constantes presiones de la corporación militar que aún conservaba una cuota considerable de poder. Luego de un muy publicitado y debatido juicio a las juntas militares por la sistemática violación de los derechos humanos que terminó en la condena a los comandantes, cientos de miembros de las fuerzas armadas debían ser juzgados por la ejecución material de asesinatos y torturas. En un esfuerzo por pacificar a los militares que, aunque desprestigiados, aún conformaban un actor político de peso comandando dos intentos de golpe en menos de dos años, el gobierno decretó las leyes de punto final y de obediencia debida destinadas a poner un plazo a la apertura de nuevas causas por violación de derechos humanos y a garantizar inmunidad a un gran número de posibles acusados.

El gobierno de Alfonsín terminó 5 meses antes de lo dispuesto por ley en medio de una crisis hiperinflacionaria que desató generalizados saqueos de supermercados y de un sentimiento bastante difundido de decepción frente a las promesas de bienestar colectivo que la primavera democrática había hecho renacer. La profunda crisis económica que se vivía en 1989 no debería hacernos olvidar un hecho crucial: Por primera vez en 60 años, un presidente democrático le entregaba la banda presidencial a otro.

El nuevo presidente, Carlos Saúl Menem, asume su cargo en 1989 y pronto decreta una ley de amnistía para los comandantes que habían sido condenados y para Mario Firmenich, líder Montonero que había sido sentenciado a 30 años de prisión. Carlos Menem gobernó a la Argentina por 10 años; años que fueron testigos de una radical transformación política, social y cultural. A poco de asumir, en un ruptura radical con las orientaciones políticas que dieron origen y guiaron al Partido Justicialista, Carlos Menem adopta un conjunto de políticas (ajuste fiscal, privatizaciones, apertura externa, flexibilización laboral, etc.) que tomadas en su totalidad siguieron muy de cerca los dictados del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial –no en vano, la Argentina fue considerada durante los años noventa, como un modelo a seguir por los organismos de crédito internacional.

Los efectos de lo que globalmente se conoce como programa de ajuste estructural adoptado, valga la pena aclararlo, con un fanatismo cuasireligioso por el gobierno menemista fueron particularmente notorios entre las clases medias y los pobres: las

primeras vieron deterioradas drásticamente sus condiciones de existencia a tal punto que muchos pasaron a engrosar las filas de lo que se dio en llamar los “nuevos pobres”; los segundos así multiplicaron su número y se vieron rápidamente privados de la fuente de sus ingresos: a partir de 1991, el desempleo comienza a crecer hasta transformarse en una característica estructural de la sociedad argentina.

Detengámonos en este aspecto porque es el que hoy, en buena medida, domina los ritmos de la vida social y política Argentina. Una anécdota que seguramente pase desapercibida en los libros de historia futura quizás resuma los efectos que el modelo neoliberal ha tenido en la sociedad Argentina. En Septiembre de 1998, el ministro de justicia y seguridad de la provincia de Buenos Aires anunció que 3.700 nuevos presos iban a ser alojados temporalmente en depósitos de viejas y desactivas plantas industriales. “No hay lugar donde ubicar a los nuevos presos, las cárceles están llenas y las comisarias también”, aseguró el ministro.

La anécdota bien resume dos procesos que caracterizan la última década argentina, dos procesos por cierto mutuamente imbricados: el cierre de fábricas y el aumento de la criminalidad. No debería haber problemas en conseguir alojamiento para la creciente población carcelaria. Entre 1988 y 1998, el Conurbano Bonaerense, corazón industrial de la Argentina, perdió 5.508 plantas industriales; aproximadamente 300 mil empleos industriales (una reducción del 22% en una década). El aumento explosivo de la desocupación producto de la desindustrialización del país y de la desconexión funcional entre las tendencias macro-económicas y los niveles de empleo se evidencia sobre todo a partir del lanzamiento del "Plan de Convertibilidad" en 1991 cuando el desempleo ascendió un 200% en el país. Los números, que no siempre dicen todo, son elocuentes en este caso: en 1974, 5% de la población económicamente activa estaba desempleada, en el 2001 el desempleo llegaba al 18% de la PEA. En democracia, la pobreza (y la desigualdad) han acompañado al crecimiento de la desocupación. En 1980, 11,5% de los hogares estaban "debajo de la línea de pobreza" en el Gran Buenos Aires. En 1995 uno de cada cuatro entraban en esa categoría. Decenas de miles de personas caen debajo de la línea oficial de pobreza todos los meses de manera constante desde fines de los noventa: “Los pobres eran el 21,5% de la población en 1991, y el 27% al final del período (en el 2000). Los indigentes eran el 3% de la población, para alcanzar el 7% en el 2000. Los desocupados y subocupados, aproximadamente 1.600.000 personas al comienzo de la década, superaban los 4.000.000 al fin de la misma”. (3)

La retirada y el desmantelamiento del estado de bienestar-populista que caracterizó a la década de los noventa hicieron que los riesgos implicados en situaciones de privación material fuesen aún mayores. Durante los años noventa, la Argentina ha asistido a un proceso de constante degradación del sistema público de educación, del sistema público de salud y de las políticas de vivienda dedicadas a sectores de bajos ingresos. El carácter caótico de las políticas destinadas a "combatir el desempleo" y de las políticas sociales destinadas a "combatir la pobreza" hace que la situación sea aún peor: los pobres son cada vez más débiles y están cada día más desprotegidos.

La privatización de las empresas estatales, elogiada como la manera argentina de “entrar” a la modernización, no es sólo constituyó una dimensión central de la retirada del estado de sus funciones básicas sino que tuvo un importante impacto en los niveles de empleo. Entre 1989 y 1999, aproximadamente 150.000 trabajadores perdieron sus trabajos como consecuencia directa del proceso de privatización. En 1989, cerca de

medio millón de trabajadores estaban empleados en las compañías estatales de teléfonos, correos, aviación, agua, energía, transporte ferroviarios y gas. En 1999, estas empresas, ahora en manos privadas, ocupan a 75.000.

LA DESOLACION NEOLIBERAL

“Futuro incierto aguarda a Cutral-co y Plaza Huincul”, “Alarmante desocupación en zona petrolera”, “La lucha por no ser otro pueblo fantasma”. Los titulares de los diarios describían así el “sentimiento de incertidumbre” que cundía entre los habitantes de estos dos pueblos del sur Argentino cuando se comenzaban a ver los efectos de la ola privatizadora, en este caso, la venta de la compañía estatal de petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). En la actualidad, más de la mitad de la población de ambas ciudades vive debajo de la línea oficial de pobreza. Cutral-co es un caso interesante no sólo porque ilustra los efectos perniciosos de la retirada del estado de su función de bienestar sino porque es allí, en más de un sentido, donde se gestará uno de los primeros y más espectaculares movimientos de protesta frente al rápido deterioro de las condiciones de vida.

En 1961, Kelio y María Esther inauguraron la panadería “El Sol” en Cutral-co. Enfermera profesional en Salta, María Esther llegó al sur Argentino en los años cincuenta para trabajar en el único hospital que la zona tenía en ese entonces, administrado por la Exxon Oil Company. Allí conoció a Kelio quien estaba “trabajando en el campo, en los pozos de petróleo.” Kelio renunció a su trabajo y con la ayuda de un amigo abrió la panadería que, durante treinta años, sería la principal de la localidad, empleando a 14 personas (tres en el mostrador, cinco panaderos, cinco confiteros, y un encargado de la distribución), utilizando 500 kilos de harina por día para preparar las varias tandas de pan. Hoy en día, la panadería es administrada por Kelio en el mostrador, y Ricardo, uno de sus hijos, quien trabaja en el único horno en funcionamiento y está a cargo de la distribución. Utilizan menos de 150 kilos de harina, y el antiguo local de la panadería es un depósito en donde almacenan la vieja e inútil maquinaria y las vacías vitrinas que solían contener “las tortas, las macitas, y los sandwiches” de las que todos hablaban en la ciudad, recuerda María Esther, y agrega “El Sol...¿viste que desolación?” La mayor parte de la producción hoy la compra la municipalidad local para ser distribuida en sus comedores populares; “eso nos ayuda bastante” admite Kelio. “Todo se puso feo cuando cerró YPF”, afirma María Esther –y es inútil recordarle que YPF no cerró sino que, simple aunque significativamente, cambió de manos. “Nos empezamos a achicar y mirá lo que somos ahora...no nos queríamos deshacer del lugar porque es la vida de mi marido. El solía ir al club, a estar con los amigos, pero ahora no va más porque hay que tener plata para eso, para invitar una copa a los amigos, invitar una cena, es mejor quedarse en casa para no pasar vergüenza”. Hoy María Esther y Kelio tienen más de setenta años y la casa en la que vivieron por más de cuarenta, en la que criaron a sus hijos y a sus nietas y nietos, y en la que generosamente me invitaron a quedarme durante mi estadía en Cutral-co, está hipotecada por una deuda al banco de la provincia “Creo que la vamos a perder”, me dice María Ester resignada para luego describir su aislamiento, la ruptura de los lazos que solían unirla a la comunidad local: “No, ya no salgo de casa, para no pasar vergüenza ¿viste? Me volví como una ermitaña.”

Cutral-co y Plaza Huincul se originan y desarrollan a partir de la actividad petrolera. Desde sus comienzos en 1933 y 1918 respectivamente, ambas ciudades crecieron al ritmo (y se volvieron altamente dependientes) de los beneficios provistos por la extracción de petróleo y las actividades de la compañía estatal YPF. Al descubrimiento del “oro negro” en la región, le siguió su ocupación territorial y el asentamiento poblacional, ambos llevados a cabo bajo auspicio estatal. El rápido crecimiento demográfico de ambas ciudades refleja la expansión de las actividades de YPF: entre 1947 y 1990, el total de la población creció de 6.452 a 44.711 habitantes, un crecimiento demográfico impresionante bajo cualquier estándar. El estado de bienestar representado por YPF otorgaba a sus obreros salarios más altos que el promedio nacional, viviendas modernas servidas por el mismo personal de la empresa, acceso a un excelente hospital, obra social y vacaciones pagas. El bienestar de YPF se extendía más allá de los límites de la empresa: toda la vida económica y social de la región estaba dinamizada por su presencia. YPF construyó barrios enteros, en otros realizó los tendidos de luz y cloacas, también construyó un hospital moderno, un teatro, un centro deportivo. YPF, en más de un sentido, encarnaba las luego cuestionadas políticas estatales activas de desarrollo.

En menos de dos años, un sistema económico y una forma de vida que duró más de cuatro décadas se hizo trizas. La privatización de YPF fue sancionada por el congreso de la nación el 24 de septiembre de 1992; desde un poco antes los devastadores efectos se hacían sentir en ambas comunidades. YPF no sólo redujo su personal de 4200 operarios a 600 en menos de un año; sino que dejó de ser la empresa-bienestar alrededor de la cual la vida de ambas ciudades giraba. En más de un sentido, el caso de YPF en Cutral-co encapsula lo que sucedió con el estado argentino durante la década de los noventa.

LA ARGENTINA SUBLEVADA

Los últimos 30 años de apertura económica y desmantelamiento de las políticas activas de desarrollo dejan entonces un saldo bastante claro: inusitada concentración del ingreso, mayor pobreza y marginalidad, hiperdesempleo. La sociedad argentina, lejos de asistir impasible a este proceso, registra en durante esta época, y particularmente a partir del año 1996, altos niveles de movilización social, tanto de los sectores populares como de las clases medias -demandas de transparencia en la administración de los bienes públicos, reclamos de seguridad ciudadana, protestas contra el desempleo y exclusión caracterizan a buena parte de la segunda mitad de los noventa. Volvamos brevemente a Cutral-co y a Plaza Huincul antes de mirar la forma que la protesta social adquirió en su conjunto durante esta época.

Entre el 20 y el 26 de junio de 1996, miles de habitantes de ambas localidades bloquearon las rutas de acceso al área interrumpiendo el tráfico de personas y vehículos durante siete días y seis noches. Nacían entonces, los piqueteros, como se denominaron los manifestantes en las barricadas. Estos reclamaban “fuentes de empleo genuinas”, rechazaban la intervención de las autoridades democráticas y de otros políticos locales (acusándolos de falta de honestidad y de “arreglos poco claros”), y demandaban la presencia del gobernador para discutir sus reclamos. La impresionante cantidad de manifestantes (veinte mil de acuerdo a la mayoría de las fuentes) hizo retroceder a las

tropas de la Gendarmería Nacional (enviadas por el gobierno nacional para despejar la ruta). El 26 de junio, el gobernador neuquino Felipe Sapag accedió a todas y cada una de las demandas en un acuerdo firmado con la recientemente formada comisión de piqueteros. Terminaba así “la pueblada” y nacía una nueva forma de acción colectiva: el piquete.

La rebelión del 20 y el 21 de Diciembre que terminó con el gobierno del presidente De La Rúa, electo en 1999 con el 48% de los votos con la promesa de terminar con “el modelo menemista”, está lejos de ser una “explosión” de una ciudadanía hasta entonces incapaz de expresar su descontento. Por el contrario, la movilización masiva a la Plaza de Mayo y el ahora famoso “cacerolazo” representan el punto álgido de un dinámico proceso de movilización popular.

Dos momentos de la última década sirven para ejemplificar las recientes modalidades de protesta. Entre abril y junio de 1997, cortes de ruta en demanda de empleo y ataques a edificios públicos se multiplican en el país. En abril, las ciudades de Cutral-co y Plaza Huincul son sitiadas durante varios días en reclamo del cumplimiento de las promesas realizadas por el gobernador luego que los habitantes de la zona realizaran su primer “pueblada” en reclamo de fuentes de trabajo en junio de 1996. Tres meses más tarde, autoridades del gobierno provincial y municipal fueron tomadas como rehenes de unos 300 manifestantes que reclamaban el aumento en los subsidios de empleo en el edificio municipal de Cutral-co. En mayo, 21 cortes de ruta, organizados por gremios municipales y organizaciones de desempleados, aislaron la provincia de Jujuy durante 12 días, consecuencia de lo cual todo el gabinete ministerial del entonces gobernador Ferraro presentó su renuncia. Cutral-co y Jujuy sean tal vez los casos más recordados pero no los únicos. En estos meses, “piqueteros”, “fogoneros” y “zanjeros” cortan la ruta nacional 3 en Trelew (Chubut) por un día en demanda de puestos de trabajo; vecinos y desocupados organizados en una multisectorial interrumpen el tráfico en la ruta nacional 38 en Cruz del Eje (Córdoba); municipales que piden la incorporación a la planta permanente de la municipalidad y el pago de sueldos atrasados cortan la ruta 11 en Capitán Bermúdez (Santa Fe). En estos meses, cortes de rutas nacionales y provinciales también ocurren en Catriel (Rio Negro), Banda del Rio Salí (Tucumán), y la ciudad de Neuquén, mientras que los maestros de todo el país confluyen en la Plaza de los dos Congresos (Buenos Aires) y levantan allí la llamada “Carpa Blanca”. A propósito del prolongado corte de la ruta 34 en Tartagal y General Mosconi en mayo, el gobernador salteño Romero (no precisamente un simpatizante de esta forma de protesta) es quien mejor resume lo que está sucediendo en este periodo de movilización popular cuando dice que el corte de ruta “es una práctica de acción política que se está divulgando en todo el país”.

A poco más de tres años, en noviembre del 2000, esta forma de protesta ya ha sido aprendida y adoptada en todo el país. Cortes se suceden en Isidro Casanova, Esteban Echeverría, y Glew (Buenos Aires), Plottier (Neuquén), Salvador Mazza, Tartagal, General Mosconi, Cuña Muerta y Zanja Honda (Salta), Libertador General San Martín (Jujuy), Resistencia (Chaco), Belén (Catamarca).

La década del noventa está marcada por el *desplazamiento* del conflicto laboral del área industrial al sector público, la *disminución* de reclamos por aumentos salariales y el *crecimiento* de demandas por pago de salarios adeudados y por despidos, la *reducción* de huelgas y el *incremento* de cortes de ruta, ollas populares y huelgas de hambre como

modos de acción colectiva, el *aumento* de la frecuencia de la protesta en las provincias, y el *creciente protagonismo* de los gremios provinciales y municipales como actores centrales del conflicto. Surgen nuevas formas de organización popular: asambleas populares, organizaciones no gubernamentales, y se renueva el activismo por los derechos humanos no sólo de los organismos ya existentes sino con nuevas agrupaciones como HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Estas formas de organización recrearon, o crearon, redes sociales. Los cortes de ruta, en particular, llevaron la política a territorios rezagados y colocaron el tema de la desocupación y las consecuencias sociales de la política socioeconómica del gobierno menemista en el centro del debate.

A pesar de la gran variedad de formas de protesta durante los noventa, las modalidades por las cuales la gente común formula sus reclamos parecen agruparse en un conjunto limitado y bastante bien definido de tipos de acción. Estas formas no cambian radicalmente entre una fase y la otra (digamos entre Abril y Junio de 1997 y Noviembre del 2000) cuando actores similares son quienes activan la protesta (desocupados y/o empleados públicos). Es más, los manifestantes parecen darse cuenta de esta recurrencia al referirse, pública y análogamente, a sus acciones y a las acciones de otros (el corte), a sus autodefiniciones y a las de otros manifestantes (siendo *piqueteros* la denominación que comienza a aparecer con más frecuencia). Tenemos, entonces, todas las indicaciones que señalan la emergencia de una forma de protestar, un cúmulo de rutinas aprendidas y compartidas mediante las cuales grupos sociales formulan colectivamente reclamos al estado: en los diez años que el actual presidente argentino, Néstor Kichner, acaba de denominar como “*década infame*” asistimos entonces al nacimiento de un nuevo repertorio de beligerancia popular. El tiempo dirá si este repertorio marca el comienzo de una nueva era en la Argentina.

1- Susana Torrado, 2004, *La Herencia del Ajuste* . Buenos Aires: Capital Intelectual, página 17.

2- Rita Arditti, 1999, *Searching for Life. The Grandmothers of the Plaza de Mayo and the Disappeared Children of Argentina* . Berkeley : California University Press, página 14.

3- Ricardo Aronskind. 2001. *¿Más cerca o más lejos del desarrollo? Transformaciones económica en los '90*. Buenos Aires: Libros del Rojas-Universidad de Buenos Aires, página 8.